

LA ACUMULACIÓN ORIGINAL DEL CAPITAL Y LAS LOGICAS DE DESPOJO CONTRA LOS PUEBLOS.

Cristóbal Silva González.
CED-INS

Una de las variantes más importantes de la democracia ha sido la consideración de que todas y todos los ciudadanos deben acceder al goce y disfrute de los derechos fundamentales siendo los estados los garantes de dicho esfuerzo para brindar las condiciones sociales, económicas que permitan la apropiación de valores fundamentales como la libertad, la dignidad, la solidaridad, la justicia. Estas concepciones son imprescindibles en el proyecto histórico de la sociedad moderna.

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos -10 de diciembre de 1948- y el advenimiento de Naciones Unidas, los estados y las sociedades modernas deben regirse bajo los referentes de los Derechos fundamentales para acceder a la justicia y la solidaridad entre los pueblos y garantizar con ello la paz que debe contener el accionar de la guerra.

Con el advenimiento del modelo neoliberal, (producto de la crisis estructural del capitalismo mundial que se inicia con la caída de la tasa de ganancia a finales de los años sesenta, y que está acompañada, entre otras cosas, por la crisis económica y financiera, la energética y ambiental, así como la social-política), se ha venido imponiendo una lógica y dinámica de un capitalismo que no tiene cortapisas en su regulación. Esta lógica rompió el pacto capital-trabajo garantizado bajo el modelo del estado y la sociedad de bienestar, desmantelando los derechos fundamentales de la sociedad por medio de planes de ajuste estructural que menoscaba a la vez, las soberanías, mercantiliza la naturaleza y se apropia de recursos estratégicos y empresas rentables de los países de la periferia.

Esta dinámica de saqueo, explotación y expoliación, surge con la crisis de la deuda en la década de los ochenta. En efecto, los países condenados al subdesarrollo por la división internacional del trabajo han sido especializados en el suministro de materias primas y de venta de fuerza de trabajo barata, a sí como la puesta en subasta de territorios ricos en dichos recursos naturales que hoy el capitalismo global demanda.

Por la imposibilidad de pagar los intereses de la deuda externa, los países pobres, condenados a ser siempre los últimos en el autodenominado desarrollo, se ven sometidos a los llamados “planes de ajuste estructural”, que no son, según Vega Cantor, más que “bombas de destrucción masiva” lanzadas contra la población y que ha acarreado más muertos que las desencadenadas por las guerras. Estas bombas lanzadas desde las lógicas de las privatizaciones, reformas laborales, obligatoriedad de la deuda, mercantilización de los derechos fundamentales, entre otros, son diseñadas desde los centros del poder y de comando capitalista, que cuentan con instituciones supranacionales como el BM, FMI, la OMC para hacer posible la sujeción, la coacción contra la gran mayoría de los habitantes del planeta.

La imposición de dicha dictadura del mercado, controlado y regulado por las ya mencionadas instituciones supranacionales financieras, así como por un cartel de empresas transnacionales, el grupo de los ocho, tiene como misión defender sus empresas y el orden económico y político en el concierto mundial, han logrado neutralizar el papel de Naciones Unidas desde la instancia del Consejo de seguridad.

Las evidencias históricas demuestran como este modelo neoliberal se ha venido imponiendo con base en dictaduras o gobiernos con proyecciones total-autoritarios, como fue el Chile de Pinochet en los años setenta, en los ochenta Indonesia, Malasia, y que también cobijó a países como

Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Por ello la dictadura que se ejerce desde el mercado transnacionalizado debe contar con la proyección de una sociedad que viene siendo regulada y controlada por el fenómeno de la mercancía y del mercado, postergándose indefinidamente la construcción de una verdadera democracia que vivencie los derechos fundamentales en toda su amplitud.

Ciertamente, hoy se ha venido denunciando como tres décadas de globalización neoliberal han tenido un impacto de devastación contra los derechos fundamentales de sectores de la población mundial, que en algunos informes e investigaciones, se denuncia como la perpetración de un genocidio social y económico contra los pueblos. Pestes como las hambrunas, el desarraigo, la diáspora, el racismo, la xenofobia, el resurgimiento de algunas enfermedades curables, han vuelto a surgir, cuando se había considerado que ya se habían superado históricamente.

Este impacto social y económico de proporciones globales, entre otros ejemplos, se expresa en los más de 250 millones de seres humanos condenados a la esclavitud laboral, nuevos esclavos conformados en su gran mayoría por niños, niñas y mujeres que trabajan en las maquiladoras y que también cobija el trabajo doméstico y la prostitución. Según la misma OIT hoy el desempleo ha venido afectando a más de 230 millones de seres humanos. Así mismo, según aquella institución hoy en el mundo del trabajo existe el 64% de los trabajadores concentrados en el sector informal, es decir, trabajadores y trabajadoras que no tienen acceso a ningún derecho social y económico, ni un contrato laboral directo, pensiones, estabilidad. Así mismo, habrá que denunciar como en un mundo donde el desarrollo de las fuerzas productivas ha tenido crecimientos espectaculares, cada 24 horas mueren más de cien mil personas de hambre, demostrándose con esto el genocidio del capital contra los pobres, que ni siquiera se les reconoce como materia prima para el trabajo.

El pensador e investigador portugués Boaventura de Souza Santos ha venido acuñando la categoría de FASCISMO SOCIAL para denunciar la producción y reproducción de una sociedad que condena al destierro y a la marginalidad a la gran mayoría de la sociedad a vivir una vida sin derechos y sin posibilidades de gestar un proyecto colectivo incluyente y respetuoso de la dignidad humana. Por ello, se afirma, que una tarea hoy impostergable es luchar por la toma de conciencia de que se tiene derechos: El Derecho a tener y vivir una vida con Derechos. Ya que una de las manifestaciones más aberrantes de la sociedad de masas, es la reproducción del individualismo autoritario y competitivo, mercantil y frenético, que legitima la ideología del neoliberalismo, sustentado por la imposición de las nociones del orden y la seguridad por encima de la libertad, la dignidad y la solidaridad entre los seres humanos.

Este panorama general se ha venido manifestando en Colombia desde la década de los ochenta, donde se puede corroborar como el modelo neoliberal ha contado con el ejercicio de la guerra, el control y terror paramilitar y la economía subterránea del narcotráfico.

Ciertamente, el Estado colombiano ha sido permisivo con el flujo de recursos provenientes del narcotráfico, es ampliamente conocido el fenómeno de la ventanilla siniestra del Banco de la República que permitió el blanqueo y la legalización de grandes cantidades de dólares provenientes de la bonanza marimbera en la administración del presidente Alfonso López Michelsen 1974-1978, primer presidente de la trayectoria del modelo neoliberal en Colombia.

En los años noventa con el fenómeno de la apertura económica y la imposición vía plan de ajuste estructural, el neoliberalismo se ve ligado al fortalecimiento del proyecto paramilitar-mafioso-terrateniente que empiezan a confluir y hacerse alianzas con algunas instituciones del estado, para contener y destruir expresiones organizativas y políticas de los movimientos sociales y políticos que disientan ante el neoliberalismo.

Es en esta década, en efecto, donde se recrudece la persecución contra organizaciones políticas de oposición, entre otros: la Unión patriótica, A luchar, el Frente popular, los movimientos cívicos populares, campesinos, estudiantes, etc.

El blanco del exterminio también se apuntaló contra sectores organizados como los sindicatos. Como se sabe, Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para ejercer los derechos y libertades sindicales, y es en esta época en pleno auge de los planes de ajuste estructural cuando el exterminio, la persecución legal y extralegal, estatal y paraestatal, mediática y jurídica los sindicatos se convierten en un blanco que se necesita eliminar para generar confianzas a los intereses privados y a la inversión extranjera.

Bajo la administración del gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, en la región de Urabá se perpetuaron delitos de lesa humanidad contra la clase trabajadora, campesinos y negritudes a manos de paramilitares. Con base en la información testimonial, así como por algunas investigaciones, se ha demostrado que algunas empresas trasnacionales como Chiquita Brands, inversionistas privados que están detrás de megaproyectos como la interconexión modal en esa zona del país, empresas madereras, de bioprospección, se han venido beneficiando por esta dinámica de terror y control, imponiendo el destierro, el despojo y el repoblamiento como dinámica propia para hacer posible un control territorial de recursos, infraestructuras e inversiones. Así han confluído capitales nacionales y trasnacionales, militarización estatal y para estatal, control por parte de las mafias del tráfico de estupefacientes y mercancías que alimentan la dinámica y las características del modelo neoliberal en “nuestro” país. Este ejemplo del Urabá es el referente a seguir por parte de algunos sectores empresariales del país y de algunas empresas trasnacionales.

Después del acto fallido y frustrante de buscar una salida política, social y económica a la guerra de baja intensidad que hoy soporta el pueblo colombiano, las élites imponen un proyecto de corte total-autoritario conocido como Destino manifiesto: Todos a marchar, que no es más la concreción de un proyecto corporativista que rompe los presupuestos modernos democráticos del pacto social expresado en el estado de derecho o en el estado social y democrático del derecho que supuestamente, bueno, así se expresa en términos de la formalidad jurídica, el estado debe estar al servicio de los derechos fundamentales de la sociedad y del individuo, mientras que en la lógica corporativista es el individuo y la sociedad quienes deben estar al servicio del estado que a la vez esta al servicio de los intereses económicos de capitalistas nacionales y trasnacionales.

Hoy podemos evidenciar como el genocidio social o la manifestación del fascismo social se da en un país con algo más de 45 millones de colombianos y colombianas, donde mal viven más de 29 millones de colombianos y colombianas en la pobreza y en la miseria, así como algo más de cinco millones de personas han soportado el destierro o desplazamiento y cinco millones de personas han tenido que inmigrar para buscar oportunidades de vida y trabajo.

En el mundo del trabajo la ofensiva criminal contra los trabajadores se ha dejado ver con toda desfachatez: un desempleo crónico que alcanza la cifra de 12.8% (dos millones 700 mil desempleados) 11 millones de personas en edad de trabajar que se rebuscan en la informalidad, por ello sin la posibilidad de acceder a ningún derecho.

Mientras que el sector financiero nacional y trasnacional alcanzó utilidades por la suma de ocho billones de pesos. Así mismo, la Procuraduría General de la Nación, -institución de control que surgió con la Constitución Política de 1991-, ha demostrado en sus informes como el 0.6% de los propietarios de la tierra en Colombia se han apropiado de algo más del 65% de las tierras productivas y de ellas el 45% están en el poder de mafias terratenientes que están vinculadas a un modelo de producción agro-industrial. Por ello en el campo colombiano la figura del campesino productor de alimentos se convirtió en una especie en vía de extinción, fenómeno generado, a la

vez, por la complementariedad de la lógica corporativa transnacional y la dinámica de la guerra, que ha desencadenado el destierro como elemento fundamental para hacer posible el modelo agro-exportador.

Por ello, según con las mismas investigaciones del estado se puede evidenciar un tragedia de proporciones humanitarias contra el sector campesino, que se ha visto bajo el flagelo de la expropiación, el saqueo y el pillaje como ha sido el robo de sus tierras y de sus formas ancestrales de producción y comercialización de los alimentos. Según la misma organización de Naciones Unidas, Colombia, es después de Sudán, el país con mayor número de desplazamiento del mundo. Y esto ha sido posible por la manera como la guerra estatal y para estatal, las mafias y el modelo agro-industrial transnacional, necesitan acomodar territorios y población para la extracción de los recursos naturales y la sobre-explotación de la fuerza de trabajo en el campo colombiano.

Hay que afirmar, asimismo, como la tenencia de la tierra ha sido un problema estructural que ha desencadenado la ya legendaria guerra en Colombia y que hoy alcanza cifras desproporcionales que nos permite afirmar como la contra-reforma agraria ha sido la constante de los últimos tiempos. También para evidenciar prácticas de cinismo, de despotismo y desprecio ante la calamidad social del desplazamiento y el destierro, se debe denunciar como con dineros públicos de la Nación fueron a dar por medio del Agro-ingreso seguro a terratenientes, sectores de la mafia y de la farándula colombiana.

Ahora bien, cuando se observa y territorializa las zonas de consolidación y control por parte del estado; vía guerra, se ve como dichos nodos territoriales en la dinámica de la globalización intenta desvertebrar territorios de algún referente nacional, para potenciarlos en la dinámica del mercado mundial, intentando, con ello, garantizar el flujo de mercancías y la apropiación de recursos estratégicos como la energía, el agua, el carbón, el petróleo, la biodiversidad, etc., que demanda un capitalismo voraz que sigue destruyendo los límites propios de la naturaleza. Para algunos autores críticos de la situación actual en Colombia, este tipo de imposición capitalista en nuestros territorios ha venido menoscabando la soberanía y la autodeterminación del pueblo colombiano. Por ello, la balcanización del territorio ha traído como consecuencia la fragmentación, atomización de los territorios y sus ordenamientos ancestrales para hacer posible la mercantilización y el despojo del territorio para su inserción en el mercado mundial.

El modelo económico capitalista colombiano tiene, en efecto, las características de ser una economía dependiente, transnacionalizada, financiera-especulativa, terrateniente- mafiosa y paramilitar, que necesita de ingentes recursos en el gasto militar. Ciertamente, el presupuesto más alto en gastos de guerra en todo el continente lo representa Colombia, (6.8% PIB producto interno bruto, es decir 22.21 billones de pesos), que para hacer posible este modelo forzado de expropiación, expropiación y destrucción de los derechos fundamentales de la sociedad, depara el ejercicio de la guerra y la intimidación.

En efecto, después de firmado la anexión de Colombia a la Corte penal internacional hoy sería el estado colombiano el enjuiciado por la ejecución de crímenes de guerra. Un ejemplo de ello, fueron la perpetración de delitos de lesa humanidad como lo fueron la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial de 1800 jóvenes pobres que fueron asesinados por los miembros del ejército nacional y que fueron expuestos como guerrilleros, o mejor, terroristas dados de baja. Estos delitos de lesa humanidad fueron ocultados por los medios masivos de comunicación que ante la presión de las evidencias y denuncias de los familiares intentaron enmascarar estos crímenes bajo el eufemismo de los “falsos positivos”.

Asimismo, habrá que observar con atención como en el último informe de Cruz Roja Internacional se afirma que, lejos de las declaraciones oficiales que afirman que ya tienen prácticamente

liquidado las guerrillas, se dice que las guerrillas cambiaron sus tácticas militares operativas y que han venido creciendo y adaptándose ante la ofensiva militar. Ello corrobora que la guerra siempre ha sido una salida en falso ante los graves problemas estructurales del país y ante el fenómeno de las insurgencias. Pero lo que si es evidente es que este modelo de capitalismo impuesto en Colombia necesita de la guerra para garantizar el despojo, la expoliación, la desposesión de la soberanía y los recursos del país. Otra manifestación de este dispositivo de guerra y negocios lo expresa las bases militares estadounidenses, un ejército hoy conformado por mercenarios de la guerra que defienden los intereses de los grupos de capital transnacional, un estado como el estadounidense que no ha firmado ningún compromiso ante entidades jurídicas para regular la guerra y que históricamente ha formado y apoyado logísticamente a escuadrones de paramilitares en Nuestra América para asesinar a los miembros de los movimientos sociales que viene luchando por otro mundo posible. Dicha presencia militar busca, en efecto, garantizar la pax perpetua de una dinámica imperial en crisis, con el objeto de desestabilizar a la región, y a la vez garantizar el despojo de los recursos del país.

Otra manifestación de la descomposición política-estatal del país ha sido la llamada “parapolítica” en la que hoy vienen procesando a más de 90 políticos que han logrado acceder cargos importantes en la administración del estado. Ello demuestra las alianzas entre sectores empresariales, terratenientes, comerciantes, miembros del estado y las estructuras mafiosas paramilitares que se han acomodado en la dinámica económica del neoliberalismo.

Por ello, se acaba de evidenciar como el estado en manos del actual gobierno, en sus delirios para mantener el orden y la seguridad ha logrado por medio de una institución que es manejada directamente por el ejecutivo como lo es el DAS (y que a la vez tiene un pasado subterráneo como lo fue su alianza en los años 80's con el narcotraficante Pablo Escobar y que dieron nacimiento a la estructura paramilitar urbana MAS), hoy ante testimonios directos de sus antiguos colaboradores se ha demostrado como este organismo ha venido interceptando llamadas, haciendo seguimientos, prácticas de espionaje que violenta mínimos derechos fundamentales y que han tenido la osadía de expiar a algunos miembros del Comisión interamericana de Derechos Humanos de la OEA, así como a los miembros de la oposición político como al POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y a algunos activistas del PARTIDO LIBERAL, así como a miembros y activistas de derechos humanos, dirigentes sociales, etc. Este espionaje busca generar confusión ante la opinión pública para justificar asesinatos, persecución judicial como ha sucedido con todos los “falsos positivos jurídicos” que han costado a la nación grandes cantidades de dinero para reparar a dichas víctimas perseguidas y estigmatizadas por el gobierno.

Ante este panorama habrá que recuperar una tradición raizal del pueblo colombiano que hoy debe recuperar la iniciativa política, la reinención de la democracia, la solidaridad, la justicia, la dignidad, la soberanía y la autodeterminación.

Por ello, muy acertadamente se afirma en la revista CEPA:

“En Colombia, es necesario insistir en la construcción de un ideario y una práctica revolucionaria de manera consciente y comprometida que genere alternativas y nuevos espacios de poder que supere las realidades de impunidad, autoritarismo, represión y silenciamiento de quienes proponen desde sus luchas cotidianas la construcción de un nuevo orden social”.